

RESOLUCIÓN No. 01113

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades delegadas por la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, en cumplimiento de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, el Decreto 948 del 5 de junio de 1995, el cual fue compilado en el Decreto 1076 de 2015, el Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974, la Resolución 627 del 7 de abril de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Resolución 6919 de 2010 de la Secretaría de Ambiente de Bogotá D.C., la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 del 12 de julio de 2012 y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, encontró mérito suficiente para dar Inicio al Proceso sancionatorio de Carácter Ambiental mediante el Auto No. 01534 del 29 de septiembre de 2012, en contra del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que el Auto No. 01534 del 29 de septiembre de 2012, fue notificado por aviso el 02 de julio de 2013 al señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios mediante el Radicado 2013EE0188993 del 20 de febrero de 2013, publicado en el Boletín Legal de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 16 de julio de 2013, y con constancia de ejecutoria del 03 de julio del mismo año.

Que a través del Auto No. 01869 del 30 de agosto del 2013, se Formuló Pliego de Cargos en contra del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de

Página 1 de 27

RESOLUCIÓN No. 01113

Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, **a título de dolo**, por los siguientes cargos:

“ARTÍCULO PRIMERO: Formular en contra del señor **MAXIMIALINO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con matrícula mercantil N° 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 N° 08 - 05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, presuntamente a título de dolo, el siguiente pliego de cargos conforme a lo expuesto en la parte motiva de presente Acto Administrativo, así:

Cargo Primero: Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado - zona residencial en un horario nocturno, mediante el empleo de un sistema de amplificación de sonido compuesto por un computador, una planta y dos baffles, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del artículo Noveno de la Resolución 0627 de 2006.

Cargo Segundo: Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

Cargo Tercero: Por no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas, según se establece en el artículo 51 del Decreto 948 de 1995.”

Que el anterior Auto de Formulación de Cargos, fue notificado por aviso el 3 de junio de 2014, con constancia de ejecutoria del 4 de junio del mismo año.

Que, dentro del término legal establecido, **NO** fue presentado por parte del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, Escrito de Descargos **NI** solicitudes probatorias, tal cual lo dispone el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

Que mediante el Auto No. 04324 de 23 de octubre de 2015, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, Abrió a Pruebas el Procedimiento Sancionatorio Ambiental Iniciado por ésta Entidad a través de Auto No. 01534 del 29 de septiembre de 2012, en contra del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN No. 01113

Dentro del precitado Auto se decretaron como pruebas dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, todos los documentos que obran en el expediente **SDA-08-2012-1379** que sean pertinentes, necesarios y conducentes para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de supuestas infracciones ambientales.

El Auto No. 04324 de 23 de octubre de 2015, fue notificado por aviso al señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, el día 28 de enero del año 2016, quedando debidamente ejecutoriado el 29 de enero de 2016.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho.

De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que "*Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano*" y en el artículo 80 ordena al Estado que "*...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados*". Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que, a su vez el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, en el inciso 2 del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del estado para "*imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

RESOLUCIÓN No. 01113

Que igualmente, el ordenamiento constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que el párrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala: *“en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”*.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que el artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 otorgó la oportunidad al presunto infractor para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, presentara descargos por escrito y aportara o solicitara la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

RESOLUCIÓN No. 01113

Que el infractor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, **NO** Presentó Escrito de Descargo **NI** Solicitudes Probatorias frente al Auto de Formulación de Pliego de Cargos No. 01869 del 30 de agosto del 2013, dentro del término legal.

Que descendiendo al caso sub examine, es importante señalar que esta autoridad ambiental ejerce las funciones de control y vigilancia de los recursos naturales en el Distrito Capital, por lo que esta investida con las facultades necesarias para hacer respetar la normativa ambiental dentro de su jurisdicción. Así pues, puede realizar visitas técnicas y adelantar procedimientos sancionatorios administrativos de carácter ambiental en caso de encontrar vulneraciones a las normas positivas ambientales.

En tratándose de las infracciones ambientales en materia de contaminación auditiva, es decir, ruido, se tratan de **conductas de ejecución instantánea**, por lo que una vez se confirma con la medición que se sobrepasaron los límites máximos permisibles de emisión de ruido para el sector y el horario, la vulneración al recurso se consumó.

Por lo tanto, las mediciones efectuadas desde el 28 de abril de 2011, de donde se desprende el Concepto Técnico No. 3383 del 15 de mayo de 2011, generan una condición única para determinar si existe o no infracción ambiental.

De otra parte, deberá anotarse que no obra prueba alguna en el expediente de que el propietario del establecimiento haya implementado medidas de mitigación y/o control de emisión de ruido proveniente de su actividad comercial.

Así mismo, dentro de las normas de rango constitucional, en el artículo 7 nació la obligación del Estado y de los particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Igualmente, en el artículo 79 de la Constitución Política elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los Ciudadanos a gozar de un ambiente sano. El medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber de las personas, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

RESOLUCIÓN No. 01113

Así mismo, dentro de la Ley 99 de 1993, se estableció en el artículo 107 que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Sea esta la oportunidad para aclararle al administrado que el procedimiento sancionatorio ambiental que nos convoca, se inició y continuó, teniendo en cuenta los niveles de ruido establecidos en la Resolución 627 de 2009 artículo 9 Tabla No. 1, en relación con lo establecido en Decreto 948 de 1995 artículos 45 y 51, hoy compilados en el Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C- 595 de 2010, al analizar la exequibilidad del parágrafo del artículo 1 y el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, estableció:

“Los párrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333).

No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales.

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración.”

Que teniendo en cuenta el análisis anterior considera ésta autoridad ambiental que en el presente caso, los Cargos Segundo y Tercero Formulados en contra del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, consistentes en haber generado ruido que traspasó los límites de una propiedad, en contravención de los estándares máximos permisibles o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas y no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas según se establece en los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995,

RESOLUCIÓN No. 01113

hoy compilados en los artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10. del Decreto 1076 de 2015, están llamados a prosperar.

Que así las cosas, en el expediente obran suficientes pruebas documentales y técnicas que dan cuenta de la responsabilidad del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, en específico los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, hoy compilados en los artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10. del Decreto 1076 de 2015, pruebas que valga decir, habida cuenta que en ningún estado procesal fueron tachadas de falsas, luego al presumirse su legalidad, comportan documentos idóneos que acreditan el compromiso del investigado, en las infracciones cometidas.

Que, con relación a la prueba documental, el tratadista Carlos Betancur Jaramillo en su obra Derecho Procesal Administrativo resalta lo siguiente:

“(.....)

Es de trascendental importancia dentro del proceso, por ser la forma documentada la que predomina en la esfera administrativa. En ésta se desenvuelve una actividad que genera, como dice Bielsa, una documentación propia, ya que ella es casi siempre formal, escrita o actuada. Esta documentación esta insita en toda la actividad administrativa. De allí que no se refiera sólo a los actos administrativos ni a los distintos pasos previos que deberán cumplirse para su expedición, sino también a todas las gestiones que cumple la administración en el ejercicio de su actividad. Así, tienen forma escrita, por regla general, los oficios, los conceptos, los requerimientos, las puestas en mora, las instrucciones de servicio, las circulares, los informes técnicos, etc....”

Que sumado a lo anterior, tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la exposición a las emisiones atmosféricas y la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realiza su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. (subrayado fuera del texto).

RESOLUCIÓN No. 01113

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.”. (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).”

Que, en este orden de ideas, queda claro que el señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, infringió los derechos colectivos de los ciudadanos y la normativa ambiental vigente, de acuerdo con el incumplimiento de los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, hoy compilados en los artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10. del Decreto 1076 de 2015.

Que, respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero “...dentro de los límites del bien común...”.

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T- 536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

“...Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia...”

RESOLUCIÓN No. 01113

Se considera pertinente en este momento hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T - 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

“La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).”

Así mismo, a través de la Sentencia T - 453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:

“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”

De acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993. Así mismo hace parte de este precepto, el cumplimiento de las obligaciones y deberes con relación a las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Que, en conclusión, es obligación de esta Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito de su competencia hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

Página 9 de 27

RESOLUCIÓN No. 01113

III. ANÁLISIS PROBATORIO

De acuerdo a los Cargos Segundo y Tercero Formulados mediante Auto No. 01869 del 30 de agosto del 2013, se realiza el siguiente análisis:

“Cargo Segundo: Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

Cargo Tercero: Por no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas, según se establece en el artículo 51 del Decreto 948 de 1995.”

Que la Secretaría Distrital de Ambiente, atendiendo el derecho de petición No. 2011ER42037 del 12 de abril de 2011, realizó Visita Técnica de Inspección el día 28 de abril de 2011 al establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, la cual concluyó en el Concepto Técnico No. 3383 del 15 de mayo de 2011, donde se determinó que los niveles de ruido de las fuentes de emisión del establecimiento, superaron en horario nocturno y en una zona de uso residencial el estándar máximo permisible de niveles de emisión de ruido establecido por la Resolución 627 de 2006 artículo 9 Tabla No. 1, al registrar **66.33 dB(A)**, en Horario Nocturno y en una Zona Residencial.

Adicionalmente, con el fin de realizar seguimiento al Radicado No. 2011EE74526 del 23 de junio de 2011, se llevó a cabo Visita técnica de Seguimiento y Control Ruido el día 28 de agosto de 2011, a las instalaciones del establecimiento de comercio **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, para establecer el cumplimiento legal en materia de ruido de conformidad con la Resolución 627 de 2006, concluyendo que el generador de la emisión **INCUMPLE** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma, en el Horario Nocturno para una Zona de Uso **Residencial**, y que no adelantó ninguna adecuación o medida para mitigar el impacto sonoro hacia el exterior, transgrediendo así lo establecido en los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995 teniendo en cuenta los niveles estipulados en el artículo 9 Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006.

De igual manera, las correcciones efectuadas al momento de la medición y los equipos utilizados para la misma (Sonómetro y Pistófono) se encontraban calibrados de manera correcta y permitieron inferir razonablemente que los valores arrojados son precisos.

Así pues, **los Cargo Segundo y Tercero se encuentran probados.**

RESOLUCIÓN No. 01113

Si bien se formularon tres (3) cargos en el Auto No. 01869 del 30 de agosto del 2013, solamente dos (2) de ellos están llamados a prosperar y de esta manera se tendrán en cuenta para los efectos de la tasación.

Así las cosas, y una vez analizado el material probatorio, se considera que el señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, infringió los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, hoy compilados en los artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Secretaría procederá a declarar responsable ambientalmente a la persona natural en mención, de los Cargos Segundo y Tercero a título de **dolo** Formulados mediante el Auto No. 01869 del 30 de agosto del 2013 y procederá a imponer una sanción, como a continuación se describe:

IV. DE LA SANCIÓN A IMPONER

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen, en este caso, al propietario del establecimiento en comento, pero al no poder ésta desvirtuar los cargos formulados, la autoridad ambiental, en este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa normativa, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.

Que esta Entidad es competente para imponer las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 1993 según la gravedad de las infracciones debidamente comprobadas. Que la precitada disposición, señala el tipo de sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Igualmente, precisa en su párrafo primero, que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados, ni del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

RESOLUCIÓN No. 01113

“ARTICULO 40.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (...) impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. *Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

(.....)”

Que el parágrafo 2 del artículo 40 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009 determinó que el Gobierno Nacional definiría mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes donde se tendría en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.

Que con fundamento en lo dispuesto anteriormente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010 por medio del cual se fijaron los criterios para la imposición de sanciones ambientales, indicando en su artículo tercero que:

“Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.”

Una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y advertida la procedencia de sanción respecto del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente emitió el Concepto Técnico de Criterios No. 01662 del 06 de mayo de 2017, que desarrolló los criterios para la imposición de la **Sanción Principal de MULTA**, acorde con los criterios establecidos en el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010, el cual dispone:

“Artículo 4°. - Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, con base en los siguientes criterios:

RESOLUCIÓN No. 01113

B: Beneficio ilícito
α: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (...)

En cumplimiento de la prenotada normativa, a través del Concepto Técnico de Criterios mencionado anteriormente, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los criterios expuestos, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010 emana del MAVDT, el cual prevén su “*Artículo 4.- Multas.*”

En el cual, para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4 de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

$$Multa = B + [(a*R)*(1+A)+Ca]*Cs$$

A continuación, se dará aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, de cara a los criterios para la imposición de la sanción principal de **MULTA** desarrollados para el presente caso respecto del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en el Concepto Técnico de Criterios No. 01662 del 06 de mayo de 2017, así:

“(.....)”

3. TASACIÓN DE LA MULTA

*Una vez realizada la evaluación jurídica y agotada la etapa probatoria dentro del presente proceso sancionatorio en contra del señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS** identificado con cédula de ciudadanía No **79.895.137**, esta Secretaría determinó que la sanción a imponer es la multa. Motivo por el cual se procederá con la elaboración del informe de criterios para establecer el valor de la sanción de acuerdo al siguiente cargo:*

Cargo segundo

Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del decreto 948 de 1995

RESOLUCIÓN No. 01113

Cargo tercero

Por no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas, según se establece en el artículo 51 del Decreto 948 de 1995.

3.1 Desarrollo de los criterios y variables para determinar el monto de la multa

Metodología: Conforme a lo establecido en el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones.) y la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y el Manual Conceptual y Procedimental – Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental - MAVDT, se desarrolla a continuación el cálculo para cada una de las variables previstas en la modelación matemática definida en el artículo 4 de esta misma resolución y para los cargos segundo y tercero formulado mediante el Auto No. 01869 del 30 de agosto de 2013.

Modelo matemático

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * R) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

Dónde:

B: Beneficio ilícito α : Factor de temporalidad *i:* Grado de afectación ambiental

R: evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

3.1.1 Beneficio Ilícito

El valor del beneficio ilícito es la cuantía mínima que debe tomar una multa para cumplir su función disuasiva, y se refiere a la ganancia económica que obtiene el infractor fruto de su conducta:

$$Y * (1 - p) B = \frac{Y}{p} \quad Y = y_1 + y_2 + y_3$$

Dónde:

RESOLUCIÓN No. 01113

Y: ingreso o percepción económica (costo evitado) B: beneficio ilícito que debe cobrarse vía multa p: capacidad de detección de la conducta

Ingresos directos de la actividad (Y1): Este tipo de ingresos se mide con base en los ingresos reales del infractor por la realización del hecho.

Teniendo en cuenta que no se evidencia un ingreso directo producto de la infracción, se considera esta variable en cero.

y1: 0

Costos evitados (Y2): Esta variable cuantifica el ahorro económico por parte del agente al incumplir las normas ambientales y/o los actos administrativos. Es decir, la ganancia que se obtiene al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.

Ya que, si bien es cierto el infractor evito los costos de la insonorización del lugar, no es posible para esta Secretaría cuantificar con exactitud estos costos. Por lo anterior se considera esta variable en cero, y el provecho económico será considerado como agravante.

y2: 0

Ahorros de retraso (Y3): En los costos de retraso se ha de establecer que se cumplieron la norma ambiental y las actividades e inversiones que de ésta dependían, pero se realizaron con posterioridad a lo exigido legamente. Por tanto, el infractor realiza la inversión requerida pero su utilidad radica en el retraso.

Teniendo en cuenta las condiciones de la infracción, esta no genera ningún tipo de ahorros de retraso por lo cual esta variable es considerada en cero.

y3: 0

Y= 0 + 0 + 0

Y= 0

3.1.2 Capacidad de la detección de conducta

Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores:

Capacidad de detección baja: p=0.40

Capacidad de detección media: p=0.45

Capacidad de detección alta: p=0.50

RESOLUCIÓN No. 01113

Teniendo en cuenta la gran cantidad de establecimientos el distrito capital que son objeto de actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental por parte de la entidad y que la visita técnica se realizó en respuesta a un derecho de petición, se establece que para el usuario **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS** propietaria del establecimiento comercial **PIMIENTA GOURMET** una capacidad de detección baja:

$$p = 0,4$$

Calculando el beneficio ilícito de acuerdo a las variables se tiene

$$B = \frac{0 * (1 - 0,4)}{0,4}$$

$$B = \$ 0$$

3.1.3 Factor de Temporalidad

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo. Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.

La variable alfa (α) se calcula aplicando la siguiente relación:

$$\alpha \pm = \frac{3}{364} * d + (1 - \frac{3}{364})$$

Dónde: d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).

Dónde:

α : factor de temporalidad

Teniendo en cuenta que la infracción fue detectada en la visita técnica del día 28 de agosto de 2011 evaluado en el concepto técnico 0297 del 08 de enero de 2012, en donde se tomó la medición de ruido por emisión, esta infracción se presenta de manera instantánea.

Por lo anterior el número de días en los que se considera permaneció la infracción es 1

$$\alpha = \frac{3}{364} * d + (1 - \frac{3}{364})$$

RESOLUCIÓN No. 01113

$$\alpha = \frac{3}{364} * 1 + \left(1 - \frac{3}{364}\right)$$

$$\alpha = 1$$

3.1.4 Evaluación de riesgos

Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así como a la magnitud del potencial efecto.

Para este caso, debido a que no se establece una afectación ambiental, aplica la evaluación del riesgo.

$$r = O * m$$

Donde

r = riesgo

O = probabilidad de ocurrencia de la afectación m = Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la Tabla

Tabla 1 Probabilidad de ocurrencia

Criterio	Valor de probabilidad de ocurrencia
Muy alta	1
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy Baja	0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un “escenario con afectación”. Una vez obtenido el valor de (l) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:

Tabla 2 Magnitud Potencial de la afectación

RESOLUCIÓN No. 01113

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación	Magnitud potencial de afectación
Irrelevante	8	20
Leve	9 - 20	35
Moderado	21 - 40	50
Severo	41 - 60	65
Critico	61 - 80	80

Para determinar la magnitud Potencial de la afectación (m), debemos determinar la importancia de la afectación (I).

Considerando como bien de protección el espacio público y como acción impactante el Ruido

Tabla 3. Identificación de bienes de protección afectados

SISTEMA	SUBSISTEMA	COMPONENTE
MEDIO SOCIOECONÓMICO	MEDIO SOCIOCULTURAL	Humanos y estéticos

A continuación, se procede a calcular la importancia de la afectación para los cargos:

- **Intensidad (In)**

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.</p> <p>Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 y 33%.</p> <p>Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el concepto técnico 0297 del 08 de enero de 2012 donde se obtuvo un valor de Leq emisión de 69,15 dB(A) y que los niveles máximos de emisión de ruido establecidos por la Resolución No. 627/2006 del MAVDT, para una zona RESIDENCIAL en el periodo nocturno cuyo nivel máximo de emisión de ruido es de 55 dB(A) se obtiene una desviación del 25,72%, se considera una ponderación de 4.</p>

- **Extensión (Ex)**

Ponderación	Afectación del bien de protección



RESOLUCIÓN No. 01113

1	<p>Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.</p> <p>Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.</p> <p>Teniendo en cuenta que el área de influencia es menor de una hectárea, se considera la mínima ponderación 1.</p>
---	---

- Persistencia (Pe)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción.</p>
	<p>Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses</p> <p>Considerando, el funcionamiento de un sistema de amplificación de sonido compuesto por un computador una planta y dos bafles, de acuerdo con el resultado de las mediciones efectuadas el día 28 de agosto de 2011, se establece que para este caso el tema de ruido es de ejecución instantánea y no constante, por no ser un contaminante persistente, se determina que la duración de su efecto es inferior a seis (6) meses. Por lo anterior se considera esta ponderación en 1.</p>

- Reversibilidad (RV)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.</p> <p>Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses</p> <p>Teniendo en cuenta, que el ruido generado por el funcionamiento de un sistema de amplificación de sonido compuesto por un computador una planta y dos bafles, de acuerdo con el resultado de las mediciones efectuadas el día 28 de agosto de 2011, es de ejecución instantánea y no constante, por no ser un contaminante persistente, se cataloga que la alteración puede ser asimilada por el entorno en un periodo inferior a un (1) año. Se considera esta ponderación en 1.</p>

- Recuperabilidad (Mc)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.</p> <p>Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año</p>

RESOLUCIÓN No. 01113

	<p>Teniendo en cuenta que una vez suspendida la emisión de ruido o implementadas las medidas de mitigación el bien de protección se recupera inmediatamente, por lo anterior se considera la mínima ponderación.</p>
--	--

Valoración de la Importancia de la afectación (I):

$$I = (3In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc$$

$$I = (3*1) + (2*1) + 1 + 1 + 1$$

$$I = 8$$

Teniendo en cuenta los valores establecidos en la tabla 2 Calificación = **Irrelevante**

Para una importancia de afectación de **8** teniendo en cuenta los valores de la tabla numero 2 corresponde una magnitud Potencial de afectación de **20**.

Probabilidad de ocurrencia (o) Teniendo en cuenta que las visitas de vigilancia y control se realizaron por un derecho de petición por lo que se presentó una conducta continua por lo tanto se considera una probabilidad de ocurrencia baja teniendo en cuenta los valores de la tabla número 1, **Baja= 0.4**

$$(O) = 0,4$$

Riesgo: definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:

Tenemos que para el cargo:

$$r = 0,4 \times 20 \quad r = 8$$

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:

$$R = (11.03 * SMMLV) * r$$

Dónde:

R = Valor monetario de la importancia del riesgo

SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos) r = Riesgo

$$R = (11,03 \times 737.717) \times 8$$

R= \$ **65.096.148** Sesenta y cinco millones noventa y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos M/cte.

RESOLUCIÓN No. 01113

3.1.5 Circunstancias agravantes y atenuantes

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.

Del análisis de los criterios para establecer las circunstancias agravantes, aplicados a la conducta para este cargo, de acuerdo a los valores establecidos en la Resolución 2086 de 2010 se tiene que el señor MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS propietario del establecimiento PIMIENTA GOURMET, una vez revisados los antecedentes del expediente SDA-08-1379 se puede determinar que el usuario cuenta con los siguientes agravantes:

Agravantes	Valor
Reincidencia	0.2
Obtener provecho económico para sí o para un tercero	0.2
TOTAL, Agravantes	0,4

Reincidencia por sobrepasar los niveles máximos permitidos para una zona de uso residencial como se establece en los conceptos técnicos 3383 del 15 de mayo del 2011 y 0297 del 08 de enero de 2012.

Obtener provecho económico para sí: Por evitar la inversión para las obras de insonorización del establecimiento.

Por lo anterior

A = 0,4

3.1.6 Costos asociados

La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor.

Para este caso y teniendo en cuenta que la Autoridad Ambiental no incurrió en costos adicionales a los de seguimiento y control propios de la Entidad, no se configuran costos asociados.

RESOLUCIÓN No. 01113

Ca = 0

3.1.7 Capacidad socioeconómica del infractor

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.

Realizada la consulta en el Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio, se encontró que el señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS** identificado con C.C **79.895.137**, propietaria del establecimiento **PIMIENTA GOURMET**, es una persona natural. Por lo anterior se procede a calcular la capacidad socioeconómica de acuerdo a la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales, conocido como SISBEN.

Una vez consultada la base de datos del SISBEN se encuentra que el señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS** identificado con C.C **79.895.137** no está registrado, por lo anterior como lo propone la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental actual (MADS), tenemos en cuenta el estrato socioeconómico que en el país varía de 1 a 6 ya que se puede asumir analógicamente que el nivel del SISBEN corresponde con el nivel de clasificación socioeconómica y que de acuerdo con lo estipulado en el sistema de información con que cuenta la Secretaría Distrital de Planeación SINUPOT al predio ubicado en la KR 78 8 05 que es el lugar donde se desarrolla la actividad y también donde se le han realizado las notificaciones se le asigna estrato 3.

Tabla 4. Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del infractor

NIVEL SISBEN	CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA
1	0,01
2	0,02
3	0,03
4	0,04
5	0,05
6	0,06
Poblaciones desplazadas, indígenas y desmovilizadas por ser población especial no poseen puntaje, ni nivel.	0,01

Fuente: <http://www.sisben.gov.co>

Teniendo en cuenta la tabla anterior se considera la capacidad socioeconómica del infractor en 0.03

RESOLUCIÓN No. 01113

$C_s = 0.03$

3.2 Multa

Definidas todas las variables y factores se proceden al cálculo de la multa:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha \square * r) * (1 + A) + Ca] * C_s$$

$$\text{Multa}_{\text{cargo segundo y tercero}} = \$0 + [(1 * \$ 65.096.148) * (1 + 0,4) + 0] * 0.03$$

Multa cargo segundo y tercero = \$ 2.734.038 Dos millones setecientos treinta y cuatro mil treinta y ocho pesos M/cte.

4. CONCLUSIONES

Se recomienda al grupo jurídico se analicen las observaciones de carácter técnico establecidas en el numeral 3. Para adoptar la decisión que corresponda dentro del proceso sancionatorio.

(.....)”

Que como consecuencia de encontrar responsable ambientalmente al señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, respecto a los Cargos Segundo y Tercero Formulados, ésta Secretaría encuentra procedente **Imponer como Sanción Principal una Multa por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 2.734.038) M/CTE.**

Que la sanción a imponer mediante la presente Resolución **NO** exonera al señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, de cumplir con las acciones y obligaciones ordenadas por esta entidad, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

Que el artículo 5 del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el

RESOLUCIÓN No. 01113

Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo artículo en el literal i) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con lo contemplado en el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016, el Secretario Distrital de Ambiente, delega en el Director de Control Ambiental, la función de expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR Responsable a título de **DOLO** al señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de ésta ciudad, de los Cargos Segundo y Tercero Formulados mediante el Auto No. 01869 de 30 de agosto de 2013, consistente en generar ruido que traspasó los límites de una propiedad en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas y por no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas, según lo establecido en los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, hoy compilados en los artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10. del Decreto 1076 de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Imponer al señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, registrado con la Matricula Mercantil No. 0001945110 del 12 de noviembre de 2009 y ubicado en la Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., la **SANCIÓN** de

RESOLUCIÓN No. 01113

MULTA por de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 2.734.038) M/CTE.

PARÁGRAFO PRIMERO. - La multa anteriormente fijada, se deberá cancelar en el término de quince (**15**) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a órdenes de la Secretaría Distrital de Ambiente (Fondo de Financiación del Plan de Gestión Ambiental), Concepto M – 05-550 otros, en la Tesorería Distrital, Ventanilla Número 2, ubicada en el Supercade de la Carrera 30 con Calle 26 y previo diligenciamiento del formato para el Recaudo de Conceptos Varios, disponible en la Sede de la Entidad, ubicada en la Carrera 14 No. 54 - 38. Una vez efectuado el pago se deberá a llegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente **SDA-08-2012-1379**.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Si el citado obligado al pago de la multa, no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta mérito ejecutivo y, por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO TERCERO. - El Concepto Técnico de Criterios No. 01662 del 06 de mayo de 2017, mediante el cual se determinó y señaló como sanción principal la multa señalada en el presente artículo, hace parte integral de este Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **PIMIENTA GOURMET FUENTE DE SODA**, en las siguientes direcciones: Carrera 78 No. 08-05 de la Localidad de Kennedy, en la Calle 53 No. 71A-39 y en la Diagonal 19 S No. 48-50 Interior 139, todas de la Ciudad de Bogotá D.C., según lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. - El señor **MAXIMILIANO CHIQUIZA CASAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.895.137, deberá presentar al momento de la notificación, documento idóneo que lo acredite como tal.

ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo ente de control enunciado y su instructivo.

RESOLUCIÓN No. 01113

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en el Boletín Legal que para el efecto disponga esta Secretaría. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Reportar la presente Sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del **RUIA**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en los artículos los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de mayo del 2017



OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

(Anexos):

Elaboró:

MARIA CRISTINA HIGUERA CARDOZO	C.C: 1049622582	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	24/05/2017
-----------------------------------	-----------------	----------	------------------	---------------------	------------

Revisó:

MARIA CRISTINA HIGUERA CARDOZO	C.C: 1049622582	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	24/05/2017
-----------------------------------	-----------------	----------	------------------	---------------------	------------

IVONNE ANDREA PEREZ MORALES	C.C: 36066367	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20161158 DE 2016	FECHA EJECUCION:	25/05/2017
-----------------------------	---------------	----------	--------------------------------------	---------------------	------------

IVONNE ANDREA PEREZ MORALES	C.C: 36066367	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20161158 DE 2016	FECHA EJECUCION:	24/05/2017
-----------------------------	---------------	----------	--------------------------------------	---------------------	------------

Página 26 de 27



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 01113

Aprobó:
Firmó:

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA C.C: 11189486 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 30/05/2017